

FERRAN GALLEGO

EL MALESTAR DE UNA ILUSIÓN. UN VIAJE A LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

En su novela *El regreso de Casanova*, August Schnitzler relata la forma en que el anciano seductor, de regreso a su Venecia natal, consigue realizar la proeza de una última conquista amorosa, pero teniendo que recurrir al engaño y a la suplantación de la personalidad del verdadero amante. Cuando conoce al verdadero amante, el joven Lorenzini, Casanova descubre en sus rasgos su propia juventud reiterada: «*Luego supo que era su propia imagen, que él mismo, treinta años más joven, venía a su encuentro. ¿Es que me he reencarnado en ese cuerpo?, se preguntó. Para eso, sin embargo, tendría que haberme muerto antes... Y se estremeció. ¿No existo ya desde hace tiempo? ¿Qué queda en mí del Casanova que era, joven, apuesto y feliz?*».

Al contemplar el paisaje político en que transcurre lo que debería ser una democracia madura, con una cultura de la tolerancia como vehículo normal de confrontación de las convicciones, como consenso establecido sobre la pluralidad; al examinar lo que está sucediendo ya no sólo como corriente profunda, sino como fenómeno exhibido en la superficie de los acontecimientos, cualquier ciudadano español podría hacerse la misma pregunta que el viejo Casanova, contemplando con asombro su propia imagen de inmadurez, de vida sólo esbozada que parece indicarle la inutilidad de su experiencia. Pues ante nosotros se encuentran las circunstancias que, vistas en la adecuada perspectiva superadora de intereses de grupo y escuetos plazos elec-

Ferran Gallego Margaleff es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Cuadernos de pensamiento político

torales, escenifican la sustitución de la democracia a la que habíamos aspirado por *otra cosa*.

Estas notas sólo son los apuntes de un viajero por ese territorio que ha modificado su apariencia y que, por tanto, modifica las circunstancias del trayecto que decidimos transitar hace treinta años. El joven paisaje que nos espera parece, como el Lorenzini que observaba Casanova, devolvernos a nuestros primeros pasos para iniciarlos de nuevo en otra dirección. Y lo que se ofrece ante nuestros ojos es difícil de exagerar, aunque un proceso de normalización lo ha hecho posible. Las zonas en las que la virtud cívica organizaba un futuro voluntario surgen damnificadas por la calidad trágica de un destino irrevocable. La comunidad en estado puro, atestado de mitologías y tiranías emocionales, sustituye a la sociedad edificada según los hábitos de la razón. Los efectos espectaculares del artificio estético suplantán a la eficacia silenciosa de la gestión política. Las impresiones nacionalistas cálidas, unánimes y simplificadoras quiebran la serena actitud del cálculo racional de una patria de ciudadanos que, sin carecer de la emoción de sus recursos simbólicos de identificación colectiva, no los utiliza para conciliar los intereses en conflicto ni para amordazar las opciones tomadas libremente por cada individuo. La complejidad de los problemas de la modernidad es pervertida por el miedo que provoca, por la inseguridad que proyecta sobre nosotros, ofreciéndonos la farsante luminosidad de las consignas, de los puntos de orientación falsificados. Lorenzini contempla a Casanova y le impone su forma de ver, impresionable, adolescente, sin carácter.

Pero nada hay en ello de ingenuidad: la sociedad española no ha regresado a las condiciones frenéticas de la Transición, como si el trayecto no se hubiera hecho. Algunos han decidido que tomara *otro camino*: no un viaje matizado, que corrija una u otra actitud. No es una modificación del ritmo al que caminamos, ni siquiera otra forma de mirar *el mismo paisaje*. Es volver atrás como si hubiéramos fallado, es regresar sobre nuestro propio tiempo y declararlo no sólo muerto, sino erróneo, para volver a empezar desde otro sitio y en otra dirección. Incluso con otra manera de relacionarnos con quienes nos acompañan.

Por eso, estas notas tienen el sentido de una exigencia, de una negativa que desea afirmar, de una rebelión que desdeña la resignada actitud de quien podría confundir un simple relevo gubernamental con la frustración de una cultura. Tienen, además, el sentido de una adver-

Cuadernos de pensamiento político

tencia, que brota del simple relato de los acontecimientos, tal y como pueden examinarse a la luz de la experiencia histórica y al margen de una inocencia que resultaría letal. Es una propuesta de ofensiva crítica para señalar que, lejos de lo que pueden pensar quienes ahora traman el ajuste ideológico de la nueva etapa –del nuevo viaje–, no son las opiniones sino los acontecimientos del mundo los que han ido dándonos la razón a quienes hemos decidido situarnos en el espacio de la sociedad liberal. En toda proyección hacia el futuro existe la defensa de una tradición; en todo cálculo racional de la trabazón de intereses en conflicto existe el peso de un mundo de emociones, de creencias, de sentimiento de comunidad. Por ello, estamos no sólo en un camino, sino en una encrucijada. En ella podemos afirmar que el trayecto que se tomó en 1978 era el camino flanqueado por los abismos de la exclusión, de la intolerancia, de las heridas abiertas por la Historia más próxima. No hay en ello determinismo alguno, porque el único camino era también el de la voluntad al tomarlo, entregados al jubiloso e inédito proceso del reconocimiento de la legítima y digna existencia de los otros, de quienes pensaban de otra manera, de los que nos hacían libres a través de su propia libertad. No tomamos esa dirección porque no hubiera otra: existía la que podía habernos llevado a la negación del adversario, a su aniquilación ideológica, a su exclusión cultural. No la tomamos porque fuese *la menos mala*, sino porque era *buen*a. Ahora, cuando queda a nuestras espaldas desfigurada, arrojada a un pasado que se reconstruye según intereses partidistas, quizás sea el momento de señalar el peligro. Pues el abismo también atrae con la fuerza magnética de su profundidad, el naufragio suena en los cánticos de las sirenas, la intolerancia embriaga en la torva confusión de las danzas tribales. Y la aparente elegancia de nuestros fundamentos institucionales puede ocultar la tenacidad de los insectos, devorando silenciosamente la armazón del edificio que a todos nos protege hasta dejarnos a la intemperie, en la orfandad cívica de la que supimos escapar hace treinta años.

■ ■ ■ Nos planteamos cómo ha sido posible. Cuáles han sido las circunstancias que permiten a una sociedad aniquilar la difícil arquitectura de unas instituciones que se construyeron sobre el consenso y la pluralidad. Unas instituciones procedentes de una Transición admirada en el mundo entero por haber sido capaz de resolver una confrontación

Cuadernos de pensamiento político

que continuaba restallando en la memoria de los ciudadanos por la trágica trayectoria de tres cuartas partes del siglo XX. Lo más paradójico de las actuales circunstancias, al compararlas con aquellas en las que se llevó adelante el proceso de democratización nacional, es que fuimos capaces de obturar todas las condiciones que permitían mantener vivos en algunos sectores de nuestra sociedad los factores de un enfrentamiento civil, para adaptarnos a lo que exigían las generaciones nacidas después de la guerra y en las postrimerías del franquismo. La Transición triunfó porque fue congruente con los deseos de la inmensa mayoría de los españoles, no porque fuera el cálculo hábil de una elite política ni porque resultara de una nueva rendición de una parte de los españoles frente a otros. Los dirigentes políticos se adaptaron a las circunstancias culturales de una sociedad moderna que no había encontrado los cauces políticos de su propio reconocimiento, y que de ninguna forma deseaba regresar a los criterios de clasificación que se habían establecido en nuestro país, como en el resto del continente, en las condiciones exasperadas de los años treinta. La nación española deseaba constituirse en nación de ciudadanos, dotada de un régimen constitucional que le permitiera normalizarse, integrarse en aquello que los países de Occidente habían obtenido en 1945. No fue un pacto entre partidos, sino un acuerdo entre la esfera de la política y el área de la sociedad civil, un encuentro entre el Estado y la ciudadanía que permitió devolver la soberanía a los españoles. Un episodio que estableció la congruencia entre las instituciones y la sociedad, entre el país real y el país oficial, ofreciendo las bases de una convivencia y de un sentido nuevo de patriotismo, que venía a superar la abrumadora trayectoria de nuestros enfrentamientos civiles.

En aquellas circunstancias, *todos los partidos* estuvieron dispuestos a aceptar el acuerdo, salvo una minoría cuya negación radical de la existencia de la nación española les llevaba, lógicamente, a desinteresarse del acuerdo al que pudiera llegarse. Sin embargo, tal acuerdo no tuvo una equivalencia de protagonistas. Como en todas las democracias europeas, fue el resultado de la aproximación entre un espacio central, que compartía una idea de la democracia parlamentaria y una afinidad con la economía de mercado: es decir, un modelo de sociedad. Junto a lo que representaba la socialdemocracia y la familia del centro-derecha liberal o democristiana, los sectores del llamado «nacionalismo moderado» –en especial el que habría de destacarse pron-

to en la gestión de la Generalidad de Cataluña– y los comunistas acompañaron esa zona central que constituía el pilar de la alternancia, siendo garantizado el pluralismo mediante la aceptación de la legitimidad de las propuestas realizadas desde estos sectores periféricos, aunque sin hacer de ellos el eje de la gobernabilidad del Estado.

Sorprende, en todo caso, que tal acuerdo, firmado sin resignación, con verdadero sentido estratégico y con entusiasmo por fortalecer una cultura democrática basada en la alternancia de fuerzas políticas moderadas y en la permisividad de cualquier opinión que no incitara, tolerara o practicara la violencia, pase a ser denunciado como un pacto de circunstancias, aceptado porque no había otro remedio, visto como una nefasta dilatación de las condiciones de democracia limitada de los primeros compases de la Transición. Aquel consenso excepcional, que debía dar paso a la normalización de la alternancia de propuestas diversas en la gestión del Estado, ha pasado a ser devaluado como la dominación de un sector de la sociedad española sobre otro, y normalizado, en algunos territorios de la nación, como la cancelación de la soberanía de pueblos enteros.

Habiendo tenido la ocasión de definir las condiciones de la Transición en otros documentos ¹, no puede evitarse, sin embargo, considerar algo que resulta de suma importancia para comprender la actual encrucijada en que se halla España. Y es que los mismos que creyeron que el modelo constitucional era satisfactorio –lo cual, en modo alguno significa que fuera intangible, sino que sus reformas no podían confundirse con un cambio de régimen que anulara los beneficios de un pacto de renunciaciones mutuas a las que se había dado garantías de permanencia–, han pasado a transmitirlo a la sociedad española como una indeseable operación destinada a sumergirla en una democracia deficiente, en un estado de excepción que permitía el regreso a las tareas gubernamentales de quienes habían sido desplazados por el advenimiento de la democracia.

¹ «Los demás son silencio. Normalidad y exclusión en la política contemporánea», en F. García de Cortázar (Ed.), *La mecánica del poder*. Papeles de la Fundación FAES, 2002 Madrid; «Los riesgos para la democracia. El nacional-populismo y la extrema derecha», en F. García de Cortázar (Ed.), *En torno a Europa*. Papeles de la Fundación FAES, 2003 Madrid; «La responsabilidad de los intelectuales», en F. García de Cortázar, *Los temas de nuestro tiempo*. Papeles de la Fundación FAES, 2002; «Pluralidad, soberanía, legitimidad. El escenario político del 14 M», en *Cuadernos de pensamiento político* FAES, nº 3 (junio-septiembre 2004); «Cuadrando círculos. Las elecciones autonómicas del 16 de noviembre y las opciones del centrismo en Cataluña», *Cuadernos de pensamiento político*. FAES, 2 (marzo 2004); «Una educación sentimental. España entre el consenso y la pluralidad (1975-1982)», seminario dictado en FAES el 11 de mayo de 2004.

Cuadernos de pensamiento político

Conviene señalar que lo que ha hecho posible el paisaje que va a describirse no ha sido la insatisfacción espontánea de los españoles, sino una determinada estrategia política. Dicha estrategia, liderada por el Partido Socialista, ha roto los más elementales criterios elaborados en aquel momento, los pactos a los que se estaba obligado por una mínima lealtad institucional y por el sentido común más obvio de defensa de la nación. Además, el PSOE ha quebrado el tipo de relaciones gubernamentales que se sostiene en Europa, las garantías de alternancia que se proporcionan a los ciudadanos, de acuerdo con una cultura en la que éstos eligen dentro de un área de coincidencia en el modelo de sociedad y en la aceptación del régimen establecido. Un partido tiene derecho a desear la victoria electoral y la permanencia en el Gobierno. Pero nunca a obtener ambas cosas mediante la desertización de una alternativa cuya ausencia impediría a los ciudadanos vivir en un régimen de alternancia en el poder. El Partido Socialista ha decidido poner las condiciones para cambiar de régimen, para poder conseguir y poseer el Gobierno durante el mayor tiempo posible, algo que no tiene precedentes en la Europa democrática. Ha arrojado a casi diez millones de electores del centro-derecha al exilio cultural de la sospecha de ser un espacio neofranquista. Hasta qué punto y a través de qué mecanismos se ha realizado este proceso es algo que debe ser reiterado como fundamento de una ofensiva que no va a favor del Partido Popular, sino en defensa del propio modelo de democracia del que se ha dotado nuestro entorno y del que fuimos capaces de dotarnos nosotros. Hacerlo así es comenzar el fatigoso trabajo destinado a restaurar la maltrecha salud democrática de nuestro país, la credibilidad de sus instituciones, la posibilidad de mantener su convivencia y de evitar procesos de marginación intolerables.

■ ■ ■ La ruptura del proceso constitucional español se inició después de la aplastante derrota electoral del PSOE en el año 2000. Aun cuando la victoria por mayoría absoluta del PP pudiera aprovechar la baja participación electoral, ello no supone la evidencia *política* que más podía preocupar en la socialdemocracia: la reiteración de la victoria tras la prueba de una gestión en mayoría relativa desde 1996 y el hundimiento de los resultados del Partido Socialista a su peor nivel desde el triunfo de 1982, precisamente en las condiciones de una alianza con la izquierda comunista, que fue ampliamente rechazada por los

Cuadernos de pensamiento político

electores, dentro de la propia dinámica de alternancia de quienes compartían modelos de sociedad que se había dado desde la aprobación de la constitución.

Por consiguiente, la ruptura del pacto constitucional pasa a hacerse visible en la decisión de proceder a una deslegitimación sistemática de las acciones de gobierno del Partido Popular, cada uno de cuyos problemas será analizado como prueba de su carácter neofranquista. La capacidad de impregnar la sociedad española de esta actitud, aun cuando implicara algo cuya gravedad no fue medida por los ciudadanos –la quiebra del modelo constitucional– fue posible porque se indicó *que dicha ruptura era el objetivo del propio Partido Popular* y que de lo que se trataba era de *restablecer las condiciones de una democracia en peligro*, proceso que había de constituir un amplio movimiento de resistencia liderado por el PSOE y flanqueado por el nacionalismo más radical y por Izquierda Unida. De esta forma, el Partido Socialista presentaba su papel como *el contrario* de lo que en realidad estaba desempeñando en aquel momento. Desplazaba el eje de la gobernabilidad a un acuerdo entre *un solo partido* con capacidad de gobernar y –otorgándoles una capacidad de interlocución exagerada– las fuerzas que se situaban fuera del sistema. El *bloque de oposición* que se fue constituyendo desde el año 2000, y al que habría de sumarse Convergencia i Unió desde el año anterior a su derrota en las elecciones autonómicas del año 2003, se basaba en el desguace de la moderación de algunos sectores del nacionalismo, cuya ambigüedad política había acabado desplazándose hacia una satelización de los sectores más coherentemente independentistas. Por otro lado, la capacidad de dejar al Partido Popular en una situación de soledad parlamentaria permitió una exhibición de *estética del autoritarismo frente a la recuperación de la democracia efectiva*. El «todos contra el PP» fue siendo escenificado en circunstancias distintas, en ocasiones por los propios errores de planteamiento estratégicos y por la escasa capacidad de penetración cultural y resistencia social del Partido Popular, por su indudable dejación de la pedagogía política e incluso por su estricto respeto a la pluralidad en los medios de comunicación, algo que el Gobierno salido de las urnas en marzo del 2004 modificó inmediatamente.

Saber cuáles fueron los motivos que hicieron posible esta estrategia es importante, aunque también lo es determinar que se trató de *un*

Cuadernos de pensamiento político

cálculo minuciosamente elaborado de reconquista del Gobierno por la vía de quebrar el sistema político de la alternancia. De hecho, un aspecto implicaba el otro: la posibilidad de llevar a cabo esta estrategia, de agrupar a sectores de Izquierda Unida y del nacionalismo en torno al PSOE, implicaba que éste perfilara como alternativa no sólo una recuperación de la democracia de 1978 presuntamente puesta en peligro, sino su alteración, sustituyéndola por una voladura del régimen. El PSOE, no sólo elaboró una línea de conducta para tomar el poder y conservarlo indefinidamente, anulando la capacidad del centro-derecha español de ser alternativa en las siguientes elecciones. Lo hizo, además, porque era la forma de ceder a las exigencias de aquellos sectores que solamente aceptarían el liderazgo socialista sobre esta condición: su disposición a abandonar el espacio de encuentro entre fuerzas moderadas y su aceptación de una revisión del régimen que iba mucho más allá de la reforma constitucional.

En este aspecto, la actitud de la izquierda ante el nacionalismo ha tenido una función esencial. Por un lado, se ha aceptado la identificación de la nación española, de acuerdo con el discurso nacionalista y en contra de la propia tradición socialdemócrata, como un accidente que no podía resolverse por el mecanismo transitorio de las autonomías, sino que había de establecerse sobre la base de un sistema de libre asociación, derivado de la restauración de comunidades soberanas que acordaban confederarse. Nunca se ha tratado, según la lógica del discurso nacionalista, de un debate sobre el nivel de transferencias, sino sobre el principio de soberanía del que éstas son mera cristalización normativa. Lo importante en el discurso nacionalista no es la competencia obtenida, sino *la razón por la que se obtiene*, haciendo de todo el proceso de reivindicación una larga fase de lucha por el reconocimiento de la soberanía y manteniendo el único objetivo coherente para un nacionalista: constituirse en un Estado soberano. El acuerdo constitucional de 1978, que establece la soberanía de la nación española y el carácter de *parte de la misma* de las instituciones autonómicas, ha sido sistemáticamente excluido en los procesos de «normalización» de las nacionalidades con Gobiernos de este carácter. Y su exigencia se ha convertido en criterio indispensable para establecer una alternativa *menos al Partido Popular que al régimen constitucional en su conjunto.*

Cuadernos de pensamiento político

Si tal desatino ha podido llegar a formar parte de ese bloque de «recuperación de la democracia» –o, más bien, ha sido condición para que el bloque llegara a constituirse– ello se debe al proceso de normalización del discurso nacionalista en España, algo que nada tiene que ver con lo que ha ocurrido en la formación de las democracias occidentales en la posguerra. Curiosamente, ha sido la izquierda la que en Italia se ha levantado contra el proceso de descentralización impulsado por la Liga del Norte, y todas las fuerzas políticas con relevancia en el continente defienden, bajo formas federales o unitarias, modelos políticos en los que el nacionalismo de identidad no constitucional ocupa el espacio propio del neo-populismo de la extrema derecha. La excepción española, en este punto, es el resultado de un largo proceso de destitución del discurso nacional español y de entrega a las tesis nacionalistas por parte de la izquierda, asumiendo el discurso de la resistencia antifranquista de una forma extraviada: lejos de limitarse a considerar a la reivindicación nacionalista como legítima, considera ilegítimas a todas las demás, sospechosas de no ser democráticas, de complicidad con la usurpación de la soberanía de los pueblos y de indiferencia ante la pluralidad cultural española. La institucionalización del Estado de las Autonomías, que ha proporcionado niveles de autoridad política que ningún otro sistema europeo conoce, pasa a contemplarse como una «concesión» arrancada al centralismo e insatisfactoria para el nacionalismo, en cuya estrategia de tensión política no sólo se encuentra la afirmación de la propia personalidad, sino la aspiración a la destrucción de la nación española tal y como se ha entendido *por todas las fuerzas políticas democráticas* durante todo el siglo XX. La equivalencia entre nacionalismo y democracia, además de ser un sarcasmo al encontrarnos en el único país europeo en el que todavía se asesina, se secuestra y se intimida en nombre de la «ocupación» de una nación oprimida, parece contemplar la actualidad del principio de autodeterminación en nuestro país, estableciendo –por el mero hecho de aceptarlo de esta forma–, que la nación española es un artefacto que poco tiene que ver con la voluntad de sus habitantes, dado que se supone que una parte considerable de los mismos no pueden ejercer ese derecho, limitado siempre a situaciones de colonización.

Tales circunstancias han podido normalizarse en unas condiciones culturales determinadas muy complejas, donde se cruza la experien-

Cuadernos de pensamiento político

cia de una dictadura que utilizaba el nacionalismo español como justificación ideológica, así como la crisis de identidades colectivas alternativas como el socialismo y el movimiento de valoración identitaria que ha acompañado a la posmodernidad. Sin embargo, en lo que más ha podido experimentarse por los ciudadanos, ha sido en el resultado de una lenta tarea de normalización autoritaria, destinada a la reclusión de quien desea mantener el principio de españolidad en un exilio cultural, en una extrañeza antidemocrática, en una marginación política permanente. Sólo debe contemplarse la forma en que una agenda nacionalista, que en sus términos de independencia interesa al 15% de los votantes catalanes en 2003, ha sido presentada como la voluntad general del pueblo catalán, ignorando las encuestas que señalan que más de la mitad de quienes habitan este territorio se consideran tan catalanes como españoles, a pesar de 23 años de campaña realizada por medios de comunicación y sistemas educativos para que crean lo contrario. La forma en que se ha culminado la quiebra de una alianza constitucionalista en el País Vasco, haciendo del Partido Socialista de Euskadi el compañero de viaje del nacionalismo a imitación de lo que sucede en Cataluña –y ello en plena campaña autodeterminista a cargo del lehendakari Ibarreche–, es un buen ejemplo de lo que viene diciéndose, que podrá matizarse a la luz de los resultados y de su administración, tanto por el Gobierno central como por los socialistas vascos. Sin embargo, el que se haya permitido la persistencia en las instituciones de una organización que no condena el terrorismo no es sólo una pintoresca y lamentable peculiaridad de nuestra realidad política, deficiente en la exigencia de ofrecer garantías democráticas y seguridad a los ciudadanos. No es sólo una carencia de respeto por las víctimas del terrorismo y por sus familiares a una distancia tan escasa de la catástrofe del 11 de marzo en Madrid –algo que indica que no todos los terrorismos son iguales para el Partido Socialista, más allá de las declaraciones, en el terreno político que más importa, que es el del aislamiento institucional–. Es además, una muestra clara de la dependencia del nacionalismo de la que antes se hablaba, uno de cuyos factores más importantes ha sido quebrar la unidad de los dos grandes partidos nacionales en aspectos como la Ley de Partidos y el Pacto Antiterrorista. Ni siquiera puede presentarse como un acto de respeto a la pluralidad y a la libre expresión de los ciudadanos, pues no condenar el terrorismo no es un acto de libertad,

sino de violencia contra otros, de propaganda justificadora en última instancia de acciones que han costado vidas humanas, exilio y vida en circunstancias precarias. Otras fuerzas expresan el mismo horizonte independentista condenando el terrorismo, y los límites de la libertad de expresión están codificados en nuestro sistema penal en otros casos que no sugieren la protesta de nadie, como los delitos de exaltación del racismo o la xenofobia.

IV. Redactadas estas notas en una fecha tan significativa como la de las últimas elecciones vascas, cuando se da otra vuelta de tuerca a la alianza estratégica que devalúa la democracia española hasta niveles inconcebibles hace sólo cinco años, lo que quiere indicarse aquí, más que aquello que ha permitido el ascenso del PSOE al Gobierno y las condiciones de ruptura del pacto constitucional en las que se ha realizado, es por dónde pueden ir las cosas en el futuro de nuestro país. Ello implica, además de definir el carácter estratégico y de decisión política en el que se ha producido el proceso, exponer algunos factores centrales de realización.

El primer argumento que se ha empleado para tratar de demostrar la pérdida de democracia que justificara una quiebra del modelo constitucional, ha sido la ausencia de voluntad reformista del Gobierno salido de las urnas en el año 2000, su encastillamiento para la defensa cerrada del orden constitucional. En este sentido, durante los cuatro últimos años de la gestión de Aznar los mecanismos de creación de la opinión pública funcionaron a la perfección a favor de la oposición, mientras los del Gobierno no pudieron establecer una defensa de sus posiciones que no se confundiera con el inmovilismo. De forma muy hábil, la propaganda socialista y nacionalista fue haciendo de la negativa a la reforma constitucional –tan legítima como la petición de realizarla–, una forma de actuar *anticonstitucional*, de modo que la paradoja alcanzaba los grotescos niveles de señalar a los reformistas como constitucionalistas y a los defensores de la Constitución como contrarios al espíritu de la misma. Sin duda, hubo errores de comunicación en esta fase por parte del Gobierno, además de falsificación de las actitudes de cada uno por el Partido Socialista. La defensa de la Constitución nunca significó que ésta fuera intocable, sino que se establecía un marco permanente de posibilidad de la reforma

Cuadernos de pensamiento político

siempre que se respetara un régimen que solamente deseaba alterar una minoría de ciudadanos, incluyendo a quienes eran independentistas, en el seno de alguna comunidad autónoma, como la catalana. Debiendo haberse explicado de esta forma, es posible que lo que llegara a comprenderse fuera distinto; sin embargo, lo que era impropio era calificar a quien podía estar en contra de *cualquier reforma constitucional* de un riesgo para la misma democracia definida por ésta. Incluso quienes consideraban que la Constitución no debía ser modificada en ningún aspecto, debieron haber sido presentados, en condiciones de lealtad a las ideas de los adversarios políticos, como defensores del marco constitucional existente en el momento. Por el contrario, la posición del Gobierno fue presentada no como opuesta a la reforma, sino como *ajena a la Constitución y contraria a la voluntad de los ciudadanos*. Si la primera cuestión era irrisoria en su mismo planteamiento lógico, la segunda resultaba enigmática, pues la voluntad de los ciudadanos, que sólo puede expresarse en las urnas, acababa de indicar su preferencia por el Partido Popular de una manera abrumadora. Y, en cualquier caso, las reformas constitucionales fueron dejadas en un territorio brumoso deliberadamente por el PSOE para poder construir su bloque de oposición sin graves fisuras en sus propias filas. Lo que se escenificó en la segunda parte de la legislatura del 2000 al 2004 fue una exigencia popular reformista a la que el Gobierno se negaba: algo que, al no definirse de forma concreta, dejaba en el aire cuestiones esenciales –como la misma persistencia de la soberanía nacional–, un comportamiento que en cualquier país acarrearía al partido que lo exhibiera la sanción social de ser apartado inmediatamente de las áreas de responsabilidad política. En España, por el contrario, diversas condiciones condujeron a la deslegitimación por otra vía, al establecerse la coincidencia entre ese impulso reformista, el conflicto de Irak, el desgaste lógico de un Gobierno en el poder y la emergencia de determinadas condiciones culturales que habían ido forjándose desde la instalación de los nacionalistas en dos Gobiernos autonómicos fundamentales, en el País Vasco y en Cataluña.

El reformismo constitucional solamente podía entenderse como la modificación del marco estatutario: ninguna otra cuestión de la Carta Magna fue considerada en los escenarios públicos en los que se produjo este debate. Y corresponde al Partido Socialista haber hecho de este tema un aspecto central del debate producido en el país, que reu-

nía en un solo proyecto a nacionalistas y no nacionalistas, contribuyendo de forma decisiva a presentar la reforma estatutaria como un avance en la democracia más que como una reivindicación nacionalista pura, aun cuando sus exigencias solamente derivaran de ese criterio. A esa focalización del debate en el tema de la soberanía nacional correspondió la actitud del Partido Popular, cuya apertura a una reforma en los límites de la Constitución fue desbordada por una comprensión de ese proceso como una trayectoria política destinada a desbordar la Carta de 1978, un escenario que, como no podía ser de otra forma, el PP se negó a aceptar y que solamente pudo existir por la toma de posición del Partido Socialista, que adoptó –en especial en el caso–laboratorio de Cataluña, como también lo hizo Izquierda Unida– una actitud de entrega a las posiciones nacionalistas presentándolas como *coincidencia con el modelo de España que planteaba el PSOE, o haciendo del PSOE la única garantía nacional reformista frente al nacionalismo*. Que a nadie extrañe la aparente paradoja, fruto del territorio de ambigüedad calculada en que se ha movido la socialdemocracia española desde el año 2000. Por un lado, participar en la preservación de un escenario nacionalista que *deja de serlo* en la medida en que un partido nacional español participa de él, ayudando, por tanto, a normalizarlo como si, lejos de ser un marco nacionalista, fuera un recinto democrático sin más. Por otro lado, proyectando la imagen de una válvula de seguridad frente a los «excesos» nacionalistas, tomando la actitud del diálogo con estas fuerzas frente a la cerrazón que había mostrado el PP y, sobre todo, la actitud que tales fuerzas habían mostrado ante la idea de España defendida por los populares.

En cualquier caso, este escenario pasa a vincular de forma permanente al PSOE a un proceso político cuya lógica es difícil de sostener, debiendo mantenerse en una permanente incoherencia territorial –con posiciones distintas en una zona u otra–, pero en un estado de indefinición que, durante mucho tiempo, solamente se mantendrá en tensión como recurso para evitar la ruptura de ese Bloque de Oposición –ahora de gobierno– que abra la posibilidad de un retorno a La Moncloa del Partido Popular. Por tanto, las propias necesidades estratégicas de la socialdemocracia establecen dos escenarios indeseables: la inactividad política plagada de gestos a la galería nacionalista, incrementando la normalización de las propuestas realizadas desde este sector *como si fueran hechos por la totalidad de la población en alguna zo-*

Cuadernos de pensamiento político

na de España, o las concesiones realizadas a los nacionalistas, sea en el campo simbólico o sea en las transformaciones de la estructura del Estado y los derechos de los no nacionalistas en Cataluña o el País Vasco. Incluso pueden darse las dos cosas al mismo tiempo, pues hemos visto ese deambular por el alambre de equilibrios circenses del que es capaz el Presidente del Gobierno, presentándose, al mismo tiempo, como alternativa y realización del nacionalismo según la zona de la que se trate –o en el mismo territorio, como sucede en el País Vasco–, y también hemos contemplado la disposición a realizar actos simbólicos generadores del beneficio de la confianza –entrega de los «papeles de Salamanca» a una disparatada «comisión de la dignidad» que hace «indignos» a los catalanes que no están de acuerdo con ella–, siempre destinados a hacer ver que, ahora, a diferencia de hace un año, en La Moncloa se encuentra un Gobierno que *comprende a los catalanes*, por ejemplo, cuando no hay más que un Gobierno dispuesto a hacer concesiones *a los nacionalistas catalanes*. Lo cual, es una pena tener que recordarlo, no es lo mismo. La exigencia del regreso de los papeles de Salamanca –ignorados por los catalanes hasta que se convirtieron en un elemento de discusión político-simbólica– no es un acto académico como sería en cualquier país normal, un episodio de eficacia administrativa e incluso de reparación democrática. Se presenta como un ejercicio destinado a mostrar hasta qué punto la Transición fue cicatera con la soberanía de un pueblo y cómo es *por esa zona precisamente* por donde debe establecerse la identidad del proyecto que se presenta, alternativo al del PP. Ha sido, por consiguiente, como tantas otras cosas, mucho más un ejercicio estético, de exhibición pública de agravios, de hacer visible un problema que nadie tenía como tal en el país, de presentarlo como resonancia del franquismo frente a la que la sociedad catalana tiene que permanecer, como territorio vencido y cautivo, alerta ante las fuerzas de ocupación. Quien crea que las cosas se interpretan de otra forma por el nacionalismo está equivocado, porque nunca ha habido un argumento de carácter administrativo, sino una reivindicación nacional que tiene que ser congruente con algo *distinto a la democracia o no necesariamente idéntico a ella*, como es la recuperación de un patrimonio que se considera expropiado por una nación y un Estado *ajenos*.

A ese criterio reformista como acelerador del proceso de deslegitimación del Gobierno popular, se sumó una estética del diálogo que

Cuadernos de pensamiento político

debería tomarse como una de las farsas de la vida política más destacable de los últimos años, a comparar, necesariamente, con la disposición al diálogo –en especial con los nacionalistas– que tuvo el Presidente González en sus años de mayoría absoluta. El establecimiento de una *estética del diálogo* se fundamenta en el perverso principio que devalúa las convicciones de un gobernante, haciendo de ellas una obcecación. Un jefe de Gobierno llevado al poder por mayoría absoluta tiene que estar abierto al diálogo siempre, *desde sus propias convicciones*, tras haber establecido un pacto sagrado con sus electores, que le dieron una responsabilidad para que cumpliera con un programa de gobierno y no con el de la oposición. El diálogo es un método que supone la existencia de principios en ambas partes y que niega el *consenso o la unanimidad permanente, para valorar la pluralidad y la alternancia*. Quizás el modelo político del Partido Socialista se basa en un sistema de partido monopolístico, que está destinado a hacer de recipiente de diversas presiones, para negociarlas constantemente y coordinarlas en un proyecto con una mínima coherencia. El modelo político democrático de nuestro entorno es otro. El partido en el Gobierno tiene que negociar con *otras posturas distintas a la suya*, llegando al máximo nivel de acuerdos posible y, en caso de que no se alcance un nivel satisfactorio, aplicando la propia política. El elemento corrector, en una democracia pluripartidista, no es la apertura de un diálogo que se da por supuesta –tan por supuesta como la voluntad de los ciudadanos en las urnas–, sino la garantía de que el desacuerdo de los ciudadanos con su Gobierno podrá expresarse en el voto a la oposición y en el desalojo del partido en el poder.

Resulta curioso observar cómo las únicas convicciones indeclinables y dignas han sido mantenidas por el nacionalismo, que ha considerado que atacarlas era una «criminalización de las ideas», mientras que se ha hecho el elogio de la ausencia de posición política alguna, como corresponde a un gobernante cuya tarea pragmática es la de la simple mediación, en el nuevo bloque en el poder. Lo que se hace con este proceso es restarle calidad a la democracia, al señalar que el buen liderazgo político se apoya en la debilidad de las convicciones, en el permanente estado de recepción y vacuidad, como un recipiente ideológicamente inocuo que debe integrar los diversos fluidos culturales en el que se apoyan sus alianzas parlamentarias. La política como ejercicio de convicción y responsabilidad es cegada a favor de la

Cuadernos de pensamiento político

política entendida como una falsa flexibilidad, usurpando el verdadero valor de las palabras, como corresponde a cualquier buen lector de Lewis Carroll. El populismo es lo contrario a la democracia, no una ampliación de la misma. La creencia firme en un sistema de participación no es la confianza en un régimen de constante abdicación de responsabilidades trasladándolas a los ciudadanos. La tarea de gobernar es una carga que se asume con un proyecto de sociedad y un programa determinado. Albert Camus decía que quien carece de carácter precisa de un método. Tal vez cabría aplicar esta consideración a quienes han llegado a confundir a los ciudadanos –importa menos que ellos mismos se encuentren confusos–, permitiendo que acepten gobernantes cuya mayor graduación política y moral es la ausencia de un proyecto claro –que *sólo se negocie en lo que no afecte a lo que los ciudadanos mismos han votado*– y que están dispuestos a desplazarse más allá de su propio deber, para instalarse en un mero recinto espectacular, como si se tratara de un transformador de energías sociales contradictorias que paralicen su tarea de gobierno en todo menos en una cosa: en el descrédito del político con ideas claras.

Tampoco deberíamos sorprendernos, puesto que algunos de los factores que han permitido el ascenso del PSOE al poder están ligados, precisamente, a este ejercicio de simplificación y de recorte de la madurez ciudadana. Por ejemplo, en lo que hace referencia a la ofensiva desatada contra el Gobierno cada vez que éste ha pretendido tocar las dos leyes educativas más nefastas que ha conocido el país en muchos años, según pueden indicar los propios educadores: la LOGSE y la LRU. Uno de los elementos más vistosos de la estrategia de la socialdemocracia ha sido amedrentar a los profesionales de un sector que sufre los evidentes estragos de la LOGSE, aludiendo a los riesgos que entrañaba lo que, en una nueva usurpación del sentido del lenguaje, se apresuraba a llamar «contrarreforma educativa», vinculándola a integrista religioso, restauración del autoritarismo, atentado contra la enseñanza pública y perjuicio a los sectores más humildes de la sociedad. Aun cuando los profesionales del sector estén viviendo una situación infernal, que ellos mismos achacan a la LOGSE, el movimiento de la oposición insertó los esfuerzos para modificarla en el proceso de destrucción de la democracia y en el estado de excepción que estaba viviéndose en nuestro país, de forma que los mismos profesores acabaron creyendo, persuadidos por una propaganda

Cuadernos de pensamiento político

abrumadora a la que no se dio adecuada respuesta desde el propio Ministerio, que se estaba sufriendo la amenaza de una pérdida de calidad. De nada servía la experiencia *directa vivida todos los días* por profesores que han expresado sus quejas de las formas más diversas, como el escaso reconocimiento de sus representantes sindicales, las jubilaciones anticipadas masivas o el alarmante absentismo laboral. La amenaza fue creída, y en ello jugó un papel la falta de comunicación de sus objetivos por el propio Gobierno, que debió haber advertido sobre la destrucción del sentido del esfuerzo en la educación, la banalización del aprendizaje cultural, la pérdida de referencias esenciales de nuestra cultura y el hundimiento del sentido de autoridad –no de autoritarismo– en el aula, problemas todos ellos que han sido sistemáticamente denunciados por los propios educadores.

Esa misma simplificación fue la que permitió *el mayor de los éxitos de la oposición liderada por el Partido Socialista*: la campaña contra la guerra de Irak. No se trata de discutir aquí la oportunidad de aquella colaboración con las decisiones tomadas, básica –no exclusivamente– por los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque lo propio de una sociedad democrática es que tal debate se produzca. Lo importante es el aprovechamiento de un desacuerdo en política de seguridad internacional para establecer dos territorios igualmente ficticios: el del pacifismo y el del belicismo. Así se vivió la movilización en contra de la guerra por millones de personas honestas, sin que se realizara una adecuada política informativa o sin que se fuera capaz de soportar la suma de presiones de deslegitimación que caían sobre el Gobierno. Considerando que se trataba de una mayoría parlamentaria que ya había sido caracterizada como ajena a los derechos de los habitantes de algunas zonas del país; considerando que episodios como la catástrofe del *Prestige* se habían vivido como modelos de la despreocupación del Gobierno por los más humildes; considerando que los fallos en infraestructuras como el AVE fueron vistos como un modelo de política ineficaz y corrupta; considerando la forma en que el Plan Hidrológico era transmitido como una amenaza ecológica que se vinculaba con la obvia despreocupación por lo ocurrido en las costas gallegas; en este marco, el conflicto de Irak pudo ser presentado en las condiciones más favorables a una *demostración del carácter no democrático del régimen*. La forma en que las cosas se han «solucionado» y la velocidad a la que se hizo, con la rápida retirada de las tropas de

Cuadernos de pensamiento político

Irak –desde luego, un Plan de Vivienda adecuado no puede ser ordenado por teléfono en un solo día–, se puede ver que la movilización fue una *escenificación* a la que debía corresponder, inmediatamente después de la recuperación del Gobierno por el PSOE, *otro gesto cargado de teatralidad* y exento del menor sentido de la responsabilidad, que, en política internacional y en situaciones de guerra, debe siempre ser extremadamente cautelosa.

Podemos hablar del éxito del Partido Socialista en la medida en que la guerra de Irak fue contemplada –y comprendida– como una *certificación* de la quiebra del modelo constitucional a cargo del Partido Popular, permitiendo que el PSOE no fuera el que se presentara de esta forma por parte del PP y de su Gobierno. El establecimiento de un territorio para la paz y otro para la guerra fue ya una nauseabunda simplificación que se trasladó a los españoles, renunciando a situar no sólo los ámbitos de la propia responsabilidad, sino los que corresponden a la necesaria educación del país en complejos temas de seguridad internacional. El PSOE pudo presentarse como el partido del *diálogo, del pacifismo y de los derechos de las nacionalidades*, frente a un Partido Popular que ejemplificaba la soberbia, el belicismo y el desprecio por los derechos de los ciudadanos catalanes o vascos. Se mintió en lo más obvio: una intervención de dos docenas de países, la mayor parte de los cuales no llegaron a combatir –entre ellos España–, pero entre los que se encontraban viejas democracias europeas, así como Australia, Japón o Nueva Zelanda, fue presentada como una *intervención unilateral de Estados Unidos* con apoyo británico y español. El Partido Socialista esquivó cuidadosamente sus responsabilidades anteriores en episodios de intervención militar, como la actitud ante la invasión de Panamá o la intervención en los Balcanes, por no hablar de la participación en la gran coalición en la Guerra del Golfo. Los aliados circunstanciales del PSOE, como Izquierda Unida, no consideraron oportuno recordar estos detalles, permitiendo que la socialdemocracia adquiriera una tradición que no se correspondía con esa carencia de sentido de la responsabilidad demostrado en aquella ocasión. Tal carencia no se refiere a una posición contraria al conflicto, sino la formación de un solo frente con sectores cuyas posiciones en política internacional son muy distintas a las del PSOE, así como la disposición a realizar una permanente caricatura de los hechos y de las palabras. No cabe entrar aquí en la ausencia de moralidad que su-

Cuadernos de pensamiento político

pone una actitud pacifista, que sugiere indiferencia ante lo que pueda suceder en el planeta y se relaciona con una tradición de pasividad ante el atropello de los derechos humanos que caracterizó a la política de bloques. Cabe, en todo caso, considerar si este país hurtó a sus ciudadanos un adecuado debate sobre seguridad internacional que luego entró por otra vía mucho más dolorosa.

La mentira necesaria se convirtió en un elemento destacable de esa destrucción de una cultura democrática en la ciudadanía. No se trataba solamente de defender una postura, algo perfectamente legítimo, sino de acostumbrar a los ciudadanos a la exigencia de rigor, de responsabilidad y de respeto a la verdad. Indicar, por ejemplo, que Europa estaba en contra del conflicto, sin considerar la posición de Holanda, Dinamarca, Italia, Portugal, Polonia o Hungría, entre otros, era un atentado a la realidad de las cosas, confundiendo la voluntad europea con la de Alemania y Francia, y permitiendo que los ciudadanos lo hicieran al mismo tiempo. Señalar que la política española se plegaba a los intereses de Washington, en lugar de plantear que las relaciones entre Europa y Estados Unidos se veían de forma distinta, es otro factor de simplificación que reforzaba esa ventaja propagandística del PSOE. Por otro lado, ¿quién iba a estar a favor de la guerra frente al partido que proclamaba su confianza en la paz? ¿Cómo iban a manifestarse las fuerzas de la cultura a favor de algo distinto a ello, aunque no se les ocurrió disponer de la misma firmeza en 1991, o cuando toleraron sin mover una ceja el genocidio en los Balcanes o en los Grandes Lagos?

El gran debate sobre la seguridad internacional que podía haberse dado en el país fue hurtado –como lo fue el que debía haberse producido sobre el modelo educativo–, en aras de dos procesos simplificadores. En el primer caso, la energía de las emociones convocadas fue de una intensidad difícilmente franqueable, en la medida en que los rasgos presuntamente autoritarios del Gobierno pasaron a ser elementos de conducta genocida, con la entrada en una fase de criminalización de su máximo responsable que no tiene parangón en la Historia reciente europea. Y que, desde luego, no la tiene en los países de nuestro continente que apoyaron la intervención. En ambos casos, en ambos aspectos básicos de una sociedad democrática, la necesaria responsabilidad de una fuerza política ante sus propios votantes y la

Cuadernos de pensamiento político

ciudadanía entera fue sabotada a favor de una delimitación que se adecuara a la deformación del sistema político realizada por un bloque de oposición cuya fase constituyente se produjo, precisamente, en el año 2003, acompañando la guerra de Irak y las elecciones al Parlamento de Cataluña.

Por último, el terrorismo fue el factor que vino a sumarse a todos los demás para diseñar esa frontera entre una España democrática y un Gobierno que debía ser desalojado rápidamente del poder, no porque se estuviera en desacuerdo con su gestión, sino *por su propia naturaleza antidemocrática*. Ya se ha indicado que la quiebra del modelo del Pacto contra el Terrorismo fue una pieza clave en la política de alianzas del PSOE en los dos últimos años de la gestión de Aznar. Lo exigían sus contactos con el nacionalismo cada vez más radicalizado. Lo exigía su propia *estética del diálogo*, que incluía una progresiva decantación hacia la definición de la violencia de ETA como algo *que debía tener algún campo de negociación*, aunque fuera a través de aliados del Gobierno con los que no se ha roto después de que hayan participado en contactos directos con la banda. Lo exigía un sector de la población inclinada a normalizar el sintagma *conflicto vasco* para referirse al puro y simple asesinato político. La célebre frase «ustedes que pueden, negocien», pronunciada por la presentadora de la SER Gemma Nierga después del asesinato de Ernest Lluch, indica la expansión de esta cultura del diálogo *también al ámbito del terrorismo*, desdeñando el progresivo ahogamiento de ETA, la marginación de las instituciones, la posibilidad de su asfixia financiera y la eficiente tarea policial. En todo caso, se normalizaban las alusiones al «modelo irlandés» y *nunca* se hablaba del modelo italiano –que podría resultar mucho más parecido a lo que tratamos aquí–, cuando *todas las fuerzas del arco parlamentario, desde el MSI hasta el PCI* cerraron filas entre 1969 y 1980, negándose a cualquier tipo de consideración política de los 350 asesinatos cometidos por la extrema derecha o la extrema izquierda.

Esa actitud ante el terrorismo había de tener un trágico final en el 11 de marzo, mostrando hasta qué punto se había deteriorado la cultura democrática española. El 11 de septiembre del 2001, cuando miles de personas fueron asesinadas en Manhattan *sin que se hubiera producido intervención militar alguna*, a nadie se le ocurrió presentar al Gobierno americano como responsable de unas condiciones que inci-

Cuadernos de pensamiento político

taron a la matanza. Los ciudadanos de todo el mundo cerraron filas y aceptaron la respuesta militar dirigida a acabar de una vez con el régimen talibán. En España, un atentado de características similares generó la confusión que sólo puede producirse en España, pues en ningún otro país de Europa opera un grupo terrorista como ETA. Y tal confusión fue aprovechada para que los ciudadanos españoles llegaran a asimilar no sólo que el Gobierno les ocultaba información, sino que *existía una relación directa entre la política exterior del Gobierno y el atentado*, algo que no explica por qué no se ha producido uno de similares características en cualquiera de las dos docenas de países que enviaron tropas a Irak, o por qué no se produjo una acción directamente orientada al responsable máximo del Gobierno o a alguno de sus colaboradores, asesinando a personas que, posiblemente, se habían manifestado contra la guerra unos meses antes. En cualquier caso, parecía más importante señalar las propias responsabilidades del Gobierno que descubrir en el terrorismo fundamentalista islámico –y, en realidad, en cualquier terrorismo– una de las grandes amenazas que se cierne sobre la seguridad de los ciudadanos, en un país que ya ha perdido mil vidas como consecuencia de esta actividad. Sin embargo, las condiciones del atentado permitían sintetizar todas las acusaciones que se habían vertido sobre el Gobierno en un solo acto espectacular, siniestro, causante de una infinita cantidad de dolor, con la intensidad de las imágenes que capturaron las cámaras e invadieron los hogares, dando paso a la ruptura del proceso electoral del 14 de marzo. El proceso de deslegitimación había alcanzado su nivel más espantoso, mediante la imputación de la responsabilidad de una masacre terrorista a las decisiones políticas del Gobierno; no fue entendida por los ciudadanos como un acto más de una plaga de nuestro tiempo, que no había precisado de excusa alguna para atacar en el corazón de los Estados Unidos dos años antes, y que no necesitará ninguna en el futuro.

V Lo que corresponde aquí es señalar hasta qué punto se está procediendo a la quiebra del modelo de Transición obtenido en condiciones de mayor precariedad política. Cabe hacerlo en tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es la forma en que diez millones de españoles han pasado a ser votantes de una opción cuya llegada al Gobierno deja de ser alternativa para ser considerada como un riesgo para la democracia. La segunda es que el eje de la gobernabilidad que

Cuadernos de pensamiento político

se ha constituido en España opera sobre *algo insólito en nuestro continente*, al establecerse sobre la base de una alianza entre socialdemocracia, nacionalismo y neocomunismo. El gran acuerdo de la moderación y del reformismo que garantizaba la alternancia en España ha sido sustituido por un mecanismo de representación que lo excluye o que, en caso de producirse, será visto como un peligroso reactivo de incalculables consecuencias, convirtiéndose tal amenaza en un factor disuasorio permanente para los votantes del centro-derecha. La tercera cuestión es que la alianza con el nacionalismo se hace sobre las bases de las propuestas de éste, de su normalización y de su legitimidad superior a las posiciones originales de los dos grandes partidos nacionales. Tales propuestas, como no podía ser de otra manera, suponen la denuncia del modelo constitucional español y, de hecho, de cualquier modelo que reconozca la existencia de la nación española como punto de partida del ordenamiento institucional.

Es importante señalar que no sólo se desea acabar con un modelo determinado de Constitución, sino con un sistema de cultura de la convivencia entre españoles. Se desea, de entrada, liquidar la posibilidad efectiva –y no sólo nominal– de una alternancia, algo que de por sí ya supone el carácter gravemente defectuoso de la democracia en España. Se pretende una normalización de la equivalencia entre nacionalismo y democracia que recluye a los ciudadanos no nacionalistas en una incómoda situación de ausencia de libertad personal, que no se formaliza más que indirectamente, mediante presión ambiental, falta de apoyo a la promoción personal, denegación de derechos lingüísticos, y perplejidad ante la existencia de personas que, por coherencia con su ideario liberal, consideran que no pueden primar uno de los múltiples elementos de identidad personal –y eso, aceptando que existen identidades fijas y no procesos móviles, históricos, de identificación. Se supone, por fin, que puede abrirse un nuevo proceso de revisión histórica que nos sitúe en las condiciones de «recuperación» de una memoria, al parecer, cercenada. De nada sirve recordar cuántos títulos se han dedicado a la Guerra Civil y a la represión franquista desde el inicio mismo de la Transición. De poco sirve preguntarse dónde se encontraban algunos activos historiadores con la edad suficiente para haber iniciado ese proceso en los años ochenta, en los que habrían tenido tantas facilidades administrativas. Lo que sí puede considerarse es si este país puede permitirse hacer algo distinto a la Historia: un proceso de reivindicación de bando en un conflicto civil,

Cuadernos de pensamiento político

que no es *exactamente lo mismo* que un proceso académico de estudio y divulgación de nuestro pasado. El peligro de una reacción en sentido contrario, establecidos los cauces de una militancia de memoriales de uno u otro sentido, se distancia en gran medida de lo que se ha hecho en otros países. Sin ir más lejos, Alemania analiza cuidadosamente el pasado nacionalsocialista, sin atribuir a ninguna fuerza política democrática del presente una vinculación con el Tercer Reich. En España, el proceso de relación se establece al considerar a los dirigentes y votantes del PP herederos del franquismo. De querer establecer otras diferencias, podría señalarse que en el caso alemán hubo *una sola represión realizada por el nazismo*, mientras que la España republicana vivió la experiencia de una represión de retaguardia que también puede exigir un ejercicio de memoria. Este trance resulta indeseable, pero por algo distinto a la voluntad de olvidar una de las fases más siniestras de nuestra Historia. Por el contrario, se trata de recordarla adecuadamente, lo cual significa no hacerla *actualidad política* orientada a procesos de identificación que, más allá de la voluntad de sus propios gestores, se producen en la sociedad, inducidos por declaraciones de responsables de medios de comunicación que pueden resultar el rubor de la audiencia.

No me referiré a otros riesgos que van a ir más en la línea de una continuidad de las políticas educativas erróneas, de una política exterior de dudosa eficacia en la defensa de los derechos humanos *en todas partes* o de una adecuada definición de la seguridad de los españoles y la modernización de las instituciones internacionales encargadas de velar por ella. No me referiré al evidente retroceso en el derecho a una información plural que se ha producido en los medios públicos. Sobre estos aspectos, caben discrepancias que corresponden a los límites aceptables del territorio de la democracia. Las primeras tres cuestiones, en cambio, me parecen de tan extrema gravedad, que implican una respuesta cultural urgente, sin la que buena parte de los compromisos que tomamos en la izquierda y en la derecha democráticas en 1978 perderán calidad y significado. De lo que se trata es de asegurar que seguimos construyendo esa sociedad democrática a la que podía referirse un personaje de Stefan Zweig, el protagonista del relato *Noche fantástica*: «*Quien se ha encontrado a sí mismo una vez, a ése ya nada en el mundo lo puede perder. Y quien ha comprendido por una vez la humanidad que hay en su interior, ése comprende a todos los hombres*».

LA ILUSTRACIÓN liberal

Revista española y americana

Junio de 2005

NÚMERO

24

AMANDO DE MIGUEL: *El antijudaísmo básico de los españoles*

CARLOS SEMPRÚN MAURA: *Elogio de la burguesía*

CRISTINA LOSADA: *La pose rebelde y el deseo de conformidad*

HORACIO VÁZQUEZ-RIAL: *A dónde ha ido
a parar la literatura comprometida*

ANTONIO SÁNCHEZ-GIJÓN: *La crisis
de las políticas internacional y exterior de España*

CARLOS RUIS MIGUEL: *Treinta años después,
¿es posible un Sáhara Occidental?*

ALEJANDRO TAGLIAVINI: *El orden natural de la sociedad*



RETRATO: Raymond Aron

• • •

Ideas en LibertadDigital

• • •

RESEÑAS • EL LIBRO PÉSIMO
EL RINCÓN DE LOS SERVILES

• • •

Y acceda a los contenidos
de todos los números anteriores
en nuestra página web

www.lailustracionliberal.com

E-MAIL: lailustracion@libertaddigital.com